Toluca de Lerdo, Estado de México, 19 de noviembre de 2019.

Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinominal, efectuada el día de hoy.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Buenas tardes, da inicio la Sesión Pública de Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha.

Secretario general de acuerdos, por favor haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta Sesión Pública.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Le informo que se encuentran presentes los Magistrados Alejandro David Avante Juárez, Juan Carlos Silva Adaya y usted, por tanto, existe el quórum legal para sesionar válidamente.

Los asuntos motivo de análisis y resolución en esta Sesión Pública son cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral, cuyas claves de identificación, nombre de los promoventes y autoridades responsables se precisan en la lista fijada en los estrados de esta Sala Regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional.

Es la cuenta, señores Magistrados, Magistrada Presidenta.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Señores Magistrados, pongo a su consideración el orden del día.

Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo de manera económica.

Gracias.

Una vez aprobado el orden del día, Secretario, licenciado Gerardo Suárez, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo.

Secretario de Estudio y Cuenta Gerardo Suárez: Con su autorización, Magistrada Presidenta, señores Magistrados.

Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 145 y 158 del presente año, promovidos, el primero por Guillermo García Herrera, y el segundo por Miguel Ángel Espino Gutiérrez, Marcelino Chávez Ledezma y el propio Guillermo García Herrera, a fin de impugnar la resolución de 6 de septiembre del presente año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el incidente innominado del juicio ciudadano local identificado con la clave TEEM-JDC-187/2018, así como del acuerdo de 9 de octubre último, emitido en el juicio ciudadano local referido por la Magistrada instructora de ese Tribunal Estatal Electoral, Yolanda Camacho Ochoa, respectivamente.

En el proyecto se propone acumular los juicios ciudadanos y estimar parcialmente fundados los motivos de disenso hechos valer por los actores, consistentes en que el Tribunal responsable se extralimitó al determinar que se debió garantizar una modalidad de audiencia a los integrantes del Consejo Comunal para que se sometiera a la decisión de la Asamblea General Comunitaria la desaparición de ese órgano, cuando ello no se encuentra previsto en el sistema normativo interno, ni en el estatuto comunal de la comunidad indígena de San María Sevina, municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Lo fundado se sustenta en que las determinaciones adoptadas por la Asamblea General de los Pueblos y Comunidades Indígenas relativos a la desaparición o extinción de sus autoridades internas constituye una decisión soberana inherente a su derecho a la libre determinación y autonomía, previsto en el artículo 2, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que contrariamente a lo argumentado por el Tribunal Electoral responsable para la eficacia y validez de tales determinaciones no se requiere garantizar una modalidad de audiencia al o a los integrantes de la autoridad que se pretenda desaparecer o extinguir.

En consecuencia, se propone revocar la sentencia incidental impugnada y en aras de resolver de manera integral la materia de la controversia sobre la desaparición o extinción del Consejo Comunal se estudia la *litis* planteada por las partes en el respectivo incidente innominado, teniendo en cuenta que la Asamblea General Comunitaria es única e indivisible, y que las decisiones de la misma no pueden ser adoptadas válidamente de acuerdo a los intereses de grupos o fracciones de la comunidad indígena.

Así, del examen realizado a las constancias que obran en los expedientes, se concluye que no existen los elementos necesarios para determinar cuál es la voluntad de la comunidad indígena de Santa María Sevina Nahuatzen, Michoacán, en relación con la existencia jurídica o no del consejo comunal y/o consejo comunal de administración, así como la vigencia de la determinación de que sea ese órgano indígena a quien le corresponda la potestad de administrar los recursos públicos de la referida comunidad.

Lo anterior, si bien en principio la designación del consejo comunal como órgano encargado de administrar el recurso público fue convalidada por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, al resolver el juicio ciudadano local TEEMJDC-002/2019 y sus acumulados y por la Sala Regional Toluca, al confirmar tal determinación en el juicio ciudadano 024/2019 lo cierto es que, ante el surgimiento de hechos recientes, como lo es la desaparición, ratificación y reestructuración del consejo comunal y/o consejo comunal de administración no existe certeza plena sobre las decisiones adoptadas en la asamblea general comunitaria.

En ese tenor, se obtiene que, derivado de la autoridad indígena que convocó a cada una de esas asambleas, la temporalidad con la que se citaron, el desarrollo del debate en la toma de la decisión respectiva, el número de personas que participaron y la evidencia documental de los ciudadanos que concurrieron no ha sesionado la asamblea general como un único órgano, sino que en cada caso se trata de reuniones concertadas por un grupo o fracción de la comunidad indígena, que es a fin a la visión política de la autoridad indígena que convoca y asume determinaciones de manera unilateral, con lo cual se ha dividido la actuación y funcionamiento de la asamblea general comunitaria.

Lo cual no es jurídicamente admisible, debido a que la asamblea general comunitaria es una autoridad única indivisible, en la cual, las decisiones de las mismas no pueden ser adoptadas válidamente de forma unilateral, de acuerdo a los intereses de grupos o fracciones de la comunidad indígena.

Así, ante la existencia de múltiples supuestas asambleas que se han celebrado en la comunidad de Santa María Nahuatzen, a partir del 19 de julio y hasta el 9 de octubre en las que no existe uniformidad en la actuación del órgano máximo de decisión, en los rubros relativos a las autoridades que las convocan, temporalidad con que se realizan, número y ciudadanos específicos que participan y principalmente el sentido de las determinaciones opuestas que se han asumido en las que, aparentemente, por un lado se desconoce al consejo comunal y/o consejo comunal de administración y por otro, se ratifica tal autoridad comunitaria, ello conduce a concluir que no existe certeza respecto del sentido de la voluntad de la comunidad indígena.

Debido a que en el caso particular hay una ausencia de los elementos mínimos necesarios que permiten dilucidar el sentido de la voluntad de la comunidad de Santa María Nahuatzen respecto de la existencia o no del consejo comunal y/o consejo de administración, así como de la vigencia de la determinación de que sea ese órgano al que se le reconozca la potestad de administrar y aplicar los recursos públicos que les asigne el ayuntamiento, se propone dejar sin efecto las asambleas que se llevaron a cabo el 19 y 30 de julio, 3 de agosto, 21 de septiembre, 28 de septiembre, 9 de octubre, todas del presente año y revocar, en consecuencia, la sentencia y el acuerdo controvertidos para los efectos que se precisan en el proyecto.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, señores Magistrados.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Muchas gracias, Secretario.

Magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de la cuenta.

¿Desean hacer uso de la voz?

Magistrado Alejandro Avante, por favor.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Gracias, Presidenta. Buenas tardes.

Vaya asuntos complicados los que se nos reúnen en la sesión del día de hoy, y es que estamos en presencia, creo yo, de la materialización de un conflicto muy serio en la organización de una comunidad indígena dentro del municipio de Nahuatzen, más adelante veremos el otro caso que también se presenta relacionado con este mismo municipio, pero ahora estamos en el caso de la comunidad de Sevina.

Y aquí el problema deriva de que el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió un incidente dentro del juicio ciudadano 187, en donde valoró o ponderó la existencia de un conflicto de lo que yo advierto es entre autoridades de la comunidad.

No estamos, desde mi óptica, en un asunto en el que el conflicto verse sobre derechos político-electorales de los integrantes de la comunidad; no hay derechos político-electorales involucrados, sino un conflicto entre autoridades comunitarias.

Si nosotros ponderamos y analizamos el caso en su contexto, deriva de un conflicto en el que una parte de la Asamblea se reúne con cierta finalidad, desconocen a un consejo comunal, designan o determinan la renovación del consejo comunal; y, por otro lado, otra convocatoria lleva a otra asamblea o a otra presunta asamblea, en la cual se ratifica el primer consejo comunal.

Y lo que materialmente estamos en presencia es que es evidente que las propias autoridades dentro de la comunidad no están procesando adecuadamente sus diferencias y esto creo que ya no es materia de conocimiento por parte de un Tribunal Electoral.

Yo no advierto en manera alguna de qué forma, desde que se le planteó al propio Tribunal Electoral de Michoacán, por qué tenía que involucrarse una autoridad electoral en este tema, máxime que en el caso a partir del 4 de diciembre de 2018 existe una autoridad del Ejecutivo Federal diseñada exprofeso para atender todas las cuestiones

relacionadas con los pueblos indígenas, y me refiero al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Esta Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas lo que hace es crear un órgano con solvencia jurídica suficiente para efecto de establecer un nuevo mecanismo de relación, y así lo dice la disposición de motivos, un nuevo mecanismo de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas para proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos.

¿Cuál es la problemática que yo advierto de que sigamos conociendo de este tipo de cuestiones dentro de ámbito jurisdiccional o en el entorno de juicios o cadenas impugnativas ya iniciadas?

Es que materialmente estamos en un aspecto que será muy difícil o prácticamente imposible en su agotamiento, porque ahora con la propuesta que nos somete a consideración, Presidenta, el paso que sigue será que deberá llevarse a cabo una Asamblea, pero dentro del propio contexto de la decisión judicial se vincula al Instituto Electoral del Estado, se trae ya, y lo celebro, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero se trae como esta autoridad que coadyuve, pero dentro del marco de lo que está ordenando en esta propia decisión judicial.

¿Y cómo vamos a dar cuenta o en qué momento vamos a dar por cumplida la decisión judicial?

¿Qué va a pasar con esta Asamblea?, ¿Qué requisitos, qué elementos deben reunirse para esta circunstancia?

Creo que eso es algo que le corresponde decidir a la autoridad comunitaria, y creo que ahí es donde ya la decisión judicial está de más, porque si esto es un tema que desde que se le planteó al Tribunal Electoral del Estado se advertía que era un conflicto entre autoridades comunitarias, lo que debió haber hecho el Tribunal era señalar que esto no era materia del conocimiento por parte del Tribunal y haberlo remitido a las autoridades de la comunidad con asesoría o coadyuvando con Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Este acompañamiento o este seguimiento que pueda hacer el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es, considero yo, mucho mejor y

mucho más solvente que el que pueda hacer el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal del Estado o esta Sala Regional, porque es un órgano especializado en la materia, que tiene vocación de solucionar conflictos y empoderar a los pueblos indígenas.

En el órgano consultivo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están representados en el órgano de dirección, están representados los pueblos indígenas, luego existe una óptica de integración de estos pueblos y comunidades indígenas por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

¿Cuál es la problemática? Que si nosotros seguimos por esta secuela electoral, no electoral, porque yo no advierto dónde está la violación a algún derecho político-electoral, en realidad lo que estamos haciendo es, pareciera ser, asimilar un poco a las comunidades indígenas porque estamos sometiéndolos a procedimientos que ellos no han decidido.

Por ejemplo, no estamos del todo claros cuál será el resultado de esta nueva convocatoria ni cómo deba garantizarse el respeto de la voluntad de la Asamblea.

La propia Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas reconoce que es la Asamblea Comunitaria la máxima autoridad y para ello señala que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas puede realizar acompañamientos muy relevantes en este tema, y me refiero a que dice: “En el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Instituto respetará las instituciones, órganos, normas, procedimientos y formas de organización con que cada pueblo y comunidad cuente para la toma de decisiones en el marco del pluralismo jurídico. Para estos efectos se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones, así como las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos.

Esto es, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene esta vocación de, a lo que forma parte ya del uso y costumbre de cierta comunidad, darle respaldo y forma y hacerle este acompañamiento para que se tome una decisión por parte de la comunidad, pero desde una óptica y un entorno estrictamente indígena.

No estamos involucrando una autoridad electoral. No estamos involucrando a autoridades que no tienen que ver con cuestiones indígenas.

Por ello es que, considero que, en el caso, lo procedente sería haberse determinado incompetente, tanto el Tribunal Electoral como nosotros para efecto de señalar que esto no es materia electoral.

No estamos en presencia de un conflicto electoral, pero claramente canalizarlo hacia el órgano del estado que tiene potestades para resolver este conflicto, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Y que sea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en acompañamiento con la comunidad quienes determinen cuál es la autoridad comunitaria que debe prevalecer o cuál es la decisión de la comunidad y eventualmente que esto sea comunicado a las instancias electorales para poder dar seguimiento o cumplimiento a las sentencias que están pendientes, pero a partir de un procedimiento que no tiene que ser dentro del juicio electoral.

Toda proporción guardada y, recordaba yo, lo que ocurrió, por ejemplo, cuando dentro de un juicio de amparo se emplazaba o se señalaba como tercero perjudicado a una persona que había fallecido.

Me parece que, en aquel momento, cuando señalaba como tercero perjudicado una persona que había fallecido, lo que hacía yo como juez de distrito era denunciar la sucesión y esperar a que estuviera un representante de la sucesión para efecto de emplazarlo como tercero perjudicado, pero yo no llevaba el juicio sucesorio. Yo no traía a los herederos y les decía: a ver, póngase aquí de acuerdo y vamos a ver cómo integramos ahora la sucesión, porque esto es importante que yo tenga.

Claro, el aspecto electoral tendrá que seguir su curso, pero hay ciertos aspectos de otra autoridad que tienen que seguir su cauce y me parece que es el caso del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Lo mismo pasaba con el comisariado ejidal en los juicios agrarios.

Entonces, creo que no perjudica en nada el tema de que, aunque detectamos cosas que deben ser solucionadas, no todas son de la jurisdicción electoral y por ello es que, vale la pena dar espacio a los entornos de solución administrativos, como en el caso es la posibilidad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

¿Funcionará o no funcionará el acompañamiento, el seguimiento que hará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? No lo sé, pero lo cierto está en que ahorita con la determinación, si es que esto se llegara a aprobar como está propuesto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene un candado, una camisa de fuera para poder actuar en sus atribuciones, porque ya nosotros dijimos que debe haber una convocatoria, que debe haber una asamblea, que esa asamblea debe ser organizada y convocada por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y cuando probablemente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podría advertir un entorno de solución diverso en la comunidad.

Aquí, lo importante es que creo que debe privilegiarse un conflicto que ya es de naturaleza más social y política, que un aspecto judicial o jurisdiccional.

Creo que esto superó ya los tribunales, los tribunales no estamos para diseñar políticas públicas ni para implementar mecanismos de solución entre autoridades o conflictos políticos entre autoridades, y aquí es lo que materialmente se está presentando. Eso es lo que en esencia a mí me llevaría apartarme de la propuesta respecto del primero de los actos impugnados, que es la determinación en el incidente del juicio 187.

Y respecto del segundo me parece ser que en realidad lo que se está reclamando es un acuerdo de trámite emitido por la Magistrada instructora del Tribunal Electoral de Michoacán dentro de este incidente.

Finalmente una cosa llevaría a la otra si tuviéramos que fallar el tema de la incompetencia, pues eventualmente sería incompetente incluso para seguir el trámite de este incidente, pero aún en ese supuesto las determinaciones que emiten los Magistrados instructores no son definitivas hasta que en tanto el pleno no convalida la actuación de los Magistrados instructores.

En ese sentido, creo que eventualmente este asunto tendría que haberse ponderado la remisión al Tribunal Electoral del estado para efecto de que el Pleno hiciera un pronunciamiento de si cabía o no esta posibilidad al existir una inconformidad de una de las partes, pero ciertamente el acuerdo en sí mismo me parece ser que no tiene el carácter de ser definitivo para efectos de un juicio como el que nos ocupa.

En ese sentido, yo votaré en contra de la propuesta y porque se declare la incompetencia de esta Sala Regional, así como del Tribunal Electoral del estado para efecto de conocer de esta controversia al no revestir la característica de tener vinculación con la materia electoral.

Es cuanto, Magistrada Presidenta, Magistrado Silva.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Gracias.

Magistrado Silva, tiene usted uso de la voz.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: Gracias, Magistrada.

Quiero manifestar que estoy de acuerdo con los términos del proyecto, sobre todo porque me parece que inclusive se puede llegar al mismo camino de lo que se está refiriendo por el Magistrado Avante, nada más que, efectivamente, habría una decisión para el caso de que se aprobara la sentencia, así fuera por mayoría.

En cuanto a que para la ejecución, el cumplimiento de la sentencia podría, efectivamente, hacerse acompañar de las actuaciones el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en esa medida resolver esta situación.

Es una cuestión de que ordinariamente se ha considerado que el Tribunal Electoral tiene competencia para pronunciarse en relación a los asuntos que están vinculados con uno de los derechos políticos de los ciudadanos, que es precisamente la consulta, y entonces en la medida de que se vengán presentando estas temáticas me parece que se puede actualizar la competencia de la Sala Regional Toluca, que es lo que ahora interesa, sobre todo que lo que se está revisando es una

decisión que fue dictada por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, en cuanto a la regularidad jurídica de la motivación.

Y entonces en este sentido seríamos nosotros competentes.

Hay temas que se pueden presentar en los tribunales electorales de las entidades federativas que, efectivamente, no por esa circunstancia ya son competencia de nosotros; por ejemplo, los juicios que tienen que ver con cuestiones laborales, esos no son susceptibles que nosotros los revisemos siguiendo otra cuerda, pero en este caso a mí me parece que dados los efectos que se tienen, las consideraciones que se realizan es que nosotros tendríamos que hacer un pronunciamiento en relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 145 del 2019 y su acumulado.

Es cuanto, Magistrada Presidenta.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Muchas gracias.

Bueno, enseguida yo voy a expresar las razones por las cuales presento esta propuesta.

Pro cuanto hace a la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de este asunto, la visión es la siguiente:

En este caso originalmente la Asamblea General determinó crear al Consejo Comunal de esta comunidad de Santa María con el propósito de que solicitara, junto con las otras autoridades tradicionales los recursos para que los administraran ellos directamente.

Esta solicitud se eleva al ayuntamiento, en el ayuntamiento celebran un convenio. Con posterioridad a ello acuden al Tribunal local con el propósito de que se sancione este convenio.

En ese momento surgen algunas cuestiones, en donde ya no se advierte claramente, porque también se presenta otro grupo de ciudadanos como terceros interesados, integrantes de la comunidad indígena, no se la advierte ya claramente cuál es la voluntad de la comunidad en relación a si desean ellos administrar o no sus recursos.

Derivado de esta situación el Tribunal local ordena una consulta, consulta que se lleva a cabo a través del Instituto Electoral de la entidad y se tiene que la comunidad define que sí quiere administrar los recursos y después en la segunda fase se establece quién será la autoridad que los administrará.

Y bueno, a partir de esta situación es cuando empiezan a presentarse un conflicto intercomunitario en donde lo que es advierte es que existen dos grupos, unos que quieren al Consejo Comunal y seguir administrando los recursos, y otros que quieren que desaparezca este Consejo y que se queden solamente las autoridades que están previstas en un estatuto comunal ahí, y ellos tienen como pretensión que sea el propio ayuntamiento el que siga administrando los recursos.

En este tema estamos dentro de este asunto en la ejecución de esta sentencia por cuanto hace a quién debe de otorgarse o no los recursos.

Y bueno, esta es la razón por la cual estimo que esto es de nuestra materia, de nuestra competencia, no solo porque está relacionado con un aspecto que tiene que ver con la administración de los recursos dentro de la propia comunidad y una ejecución de sentencia derivado de una consulta, para lo cual se ha estimado que el Tribunal Electoral tiene competencia.

Yo lo veo como o desde mi opinión constituye un acto que está involucrado y relacionado con todo esto.

Bueno, esto es, por una parte.

Ahora, por cuanto al fondo, en el proyecto se relata que sea llevado a cabo un sinnúmero de denominadas asambleas, del 19, del 30 de julio, del 3 de agosto, 21 de septiembre, 28 de septiembre y nueve de octubre.

En algunas de ellas, la asamblea general o la denominada asamblea general propone la desaparición o extinción del consejo comunal y en otras, lo que se propone es su ratificación y lo que es más una reestructuración.

En esta parte, las constancias de autos, lo que permiten advertir es que no se trata propiamente de la celebración de una asamblea general, si lo que se ha llevado a cabo, sino de las reuniones que de manera separada han llevado estos dos grupos pertenecientes incluso a las propias autoridades indígenas, de las otras autoridades tradicionales, según pretenden o no pretenden que se lleve a cabo la administración de los recursos.

Sin embargo, nosotros en el asunto que planteamos es que, vislumbramos que la asamblea general no solamente es la máxima autoridad en la comunidad indígena, sino que se trata de un órgano único, indivisible e incluyente.

De forma tal que, la decisión que se toma en esta asamblea es la decisión que se debe tener entendida que se adopta por la mayoría de los integrantes de toda la comunidad indígena y no es lo que ahorita aquí tenemos.

Lo que tenemos es una reunión, por una parte, de un grupo y la reunión, por otro lado, de otro grupo.

De ahí que, lo que resulta es que existe una falta de certeza de cuál es la voluntad de la comunidad indígena.

Hay otro aspecto que también resulta importante resaltar, que, así como la comunidad indígena, a través de su asamblea general decidió integrar a este consejo comunal tiene la facultad permanente de decidir si lo mantiene o si, por el contrario, determina su desaparición.

Y en este sentido es que nosotros, bueno, en mi ponencia, lo que estamos proponiendo es que sea propia asamblea general, pero sí en su integridad la que tome, incluyendo a los grupos opositores, los que tomen esta decisión de qué es lo que debe de ser.

¿Por qué se involucra al Instituto Electoral? Precisamente se involucra al Instituto Electoral para que coadyuve en la celebración de esta Asamblea, porque no existiría al menos una forma de garantizar que en realidad la convocatoria se emita para todos. ¿Por qué? Porque dependiendo de las propias autoridades que conforme al estatuto tienen

la facultad de convocar a la Asamblea, dependiendo del grupo en el que se está, es a quienes se advierte que se ha estado convocando.

Entonces, a fin de poder establecer y garantizar que sea a toda la comunidad a quien se convoque, es que se está dejando esta tarea al Instituto Electoral, vinculándolo junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que coadyuven en ello. Esto por una parte.

Y, por otra parte, por cuanto hace a la determinación adoptada por la Magistrada encargada de la instrucción de este asunto por cuanto al acuerdo que dictó, la razón por la cual se estima procedente revocar la decisión es porque en mi opinión no se trataba de un acuerdo de mero trámite en donde se tratase de un tema de procesal para reconocer personería, en atención a que lo que está precisamente involucrados son cuestiones sustantivas porque de ello depende a quién se van entregar o no los recursos y estos recursos ya hemos hoy referido a quién se van a entregar queda con falta de certeza derivado de las múltiples reuniones que se han llevado a cabo por estos grupos opositores.

De ahí que teniendo en consideración esta situación es por lo que se propone dejar sin efectos estas Asambleas que se han venido llevando a cabo o estas reuniones, no propiamente Asambleas, estas reuniones de estos dos grupos que se han venido llevando a cabo y ordenar que sea la propia Asamblea General la que determine cuál es su voluntad en relación a si debe permanecer o si debe desaparecer este Consejo Comunitario. Esas son las razones sustantivas que vienen sosteniendo el proyecto que se propone. Un tema complicado.

Se apela también aquí a la intervención del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque tiene todo este tipo de facultades y como refiere el Magistrado Avante, parece ser que además sus facultades y conocimiento para poder acompañar y poder llegar a un mejor acuerdo pueden abonar en este conflicto que no se ve fácil de resolver si es que las partes involucradas deciden realmente llegar al propio convencimiento de qué es lo mejor para la comunidad, más allá de sus propias visiones o intereses.

Estas son las razones.

Magistrado Avante, por favor.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Gracias, Presidenta.

Y me parece ser que, precisamente, en cuanto al fondo de la controversia, me parece que tanto la argumentación suya como del Magistrado Silva es impecable en cuanto a que existe una necesidad de solucionar este problema.

Me parece claro que la problemática existe, es evidente, pero la pretensión del actor en este juicio, quien es el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Santa María Sevina, es que se deje sin efectos la determinación de la resolución incidental del Tribunal para efecto, y en estos juicios se resolvió sobre la pretensión de que se convalidara el desconocimiento de un Consejo Comunal o Consejo Comunal de Administración y con ello se le retirara la potestad de administrar los recursos.

Esto, en criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sido determinado como que esto no es materia electoral. Al resolver la Segunda Sala un amparo en revisión, se ha pronunciado sobre que estas circunstancias no forma parte de la materia electoral y que debe privilegiarse en aquel caso, un caso relacionado con Oaxaca, debe privilegiarse la resolución de las instancias indígenas; esto fue el 8 de mayo, en el amparo directo 46 de 2018.

Entonces, tenemos un conflicto que en una nuez lo que tiene que definir es quién va a administrar los recursos. La Segunda Sala de la Corte ya ha dicho que esto no es materia electoral, pero además la pretensión final no es la restitución de ningún derecho político-electoral de ninguna de las o los ciudadanos, es que se deje sin efectos el nombramiento de una autoridad municipal para administrar los recursos que le han sido conferidos de manera directa.

Luego entonces, mi conflicto viene en que claramente advierto yo la necesidad de que procese esta circunstancia. Y decía el Magistrado Silva, pues probablemente al final del día podemos llegar al mismo tema porque el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como está el proyecto, al final se está dándole participación o se le está vinculado para efecto de que coadyuve.

Sí, la realidad es que ya es una convocatoria que también estamos vinculando a otra autoridad, eminentemente electoral para que se emita, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá participar en la medida.

¿Por qué yo veo una clara diferencia? Vaya, el problema que estamos nosotros aquí advirtiendo es: Uno, hay dos autoridades que se están peleando, uno convoca a una Asamblea y lleva a cabo su Asamblea, donde dice: “Desconoce a este”, y otro lleva a cabo su Asamblea donde dice: “Mira, no solo no me desconocen, sino hasta me ratifican”.

Entonces, ¿Dónde donde yo creo que es favorable mejor no seguir por un tema jurisdiccional y mejor optar por un camino administrativo? Porque finalmente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas lo que podría hacer es llegar a la comunidad, primero hacer un censo, determinar quiénes integran la comunidad, que la propia comunidad determine quiénes son los que deben participar en las asambleas, teniendo certeza de quiénes deben participar en las asambleas hacer una convocatoria para definir la fecha, en fin.

Toda esta serie de proceso que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como especialistas en la materia indígena pueden desarrollar y que nosotros no.

Pareciera ser que nosotros estamos administrando el conflicto, porque en realidad, ni una de las autoridades está asumiendo la responsabilidad de desconocer a la otra, ni está que se les reconozca o se les ratifique, a pesar de que saben que hay una parte de la comunidad que no está respaldando esta posición.

¿Y quién está pagando aquí todo el problema? La comunidad de Santa María Sevina y la comunidad de Santa María Sevina es quizás la más ajena a toda esta problemática de falta de liderazgos o de conflictos de poder, pero sí es la que está pagando los resultados.

Ahora, lo que se está haciendo es, decía yo, administrar el conflicto, porque en realidad no estamos dando una solución. Estamos proponiendo que ahora se lleve a cabo una nueva asamblea, pero otra vez tenemos el conflicto de que en el siguiente juicio que venga acá la

temática va a ser: no, bueno, es que participaron en la asamblea quienes no tenían derecho a participar, se excluyó a quienes sí debían participar, es que la convocatoria no reunió los requisitos, es que no se emitió y otra vez. Ah, no, se deja sin efectos la convocatoria y venga de nuevo un nuevo procedimiento para efecto.

En cambio, si materialmente se opta por involucrar ya una autoridad que dé todo el acompañamiento y es una autoridad del gobierno del Ejecutivo Federal, diseñada para eso, que acompañe desde cero este procedimiento, pues eventualmente puede llegar a una solución, incluso de mediación, sentando a ambas autoridades comunales para efecto de lograr un aspecto más provechoso que el que estamos ahora teniendo.

Ahora, ciertamente podemos llegar al mismo resultado, sí, claramente como también igual y podíamos llegar al mismo resultado si yo como juez de distrito hubiera traído a los herederos y hubiéramos llegado a la determinación de quién fuera el albacea. A lo mejor hubiéramos llegado al mismo resultado, porque en el sucesorio se hubiera designado a la misma persona, pero lo cierto está en que no es un aspecto que involucre a la materia electoral.

Yo no advierto que estemos restituyendo ningún derecho político-electoral y yo recuerdo un caso que tuve en Guanajuato en donde el conflicto versaba sobre la elección del comisariado ejidal en un ejido en Salamanca y ahora que reflexiono sobre ese tema, pues, si hubiéramos seguido la lógica que esto, pues eso era un tema electoral, porque el artículo 27 de la Constitución también garantiza al comisariado ejidal que debe ser electo democráticamente, conforme a los usos del ejido, en fin.

Si seguimos con esa dinámica, al rato vamos a tener aquí los conflictos de las elecciones de los comisariados ejidales que están en la Ley Agraria.

La problemática es que, creo que hay ciertas cosas que hay que reservar la jurisdicción electoral para lo que creada y no fue creada para solucionar conflictos indígenas.

Creo que fue una circunstancia compleja cuando se empezó a abordar el entorno del conocimiento de los conflictos indígenas y sí, ciertamente

en algunos aspectos y en los cuales asuntos en los que yo he fallado a favor y todo, está vinculados derechos político-electorales y allá tendremos que seguir caminando cuando estén involucrados derechos político-electorales.

Aquí no, aquí es un conflicto entre autoridades. Les decía yo a mis abogados, pareciera ser como si estuviéramos en un conflicto entre la dirección general de Obras de un ayuntamiento con la dirección general de Alcantarillado y entre ellos estuvieran desconociéndose unos a otros y vinieran a demandar al Tribunal Electoral para que determináramos qué autoridad es la que debe prevalecer.

Es un conflicto entre autoridades, son facultades entre autoridades y ellos tienen que procesar como autoridades sus diferencias, más aún en el caso de autoridades indígenas, porque está reconocido constitucionalmente que se debe privilegiar las decisiones al interior de las comunidades indígenas.

Por ello es que creo que no se termina abonando a la solución del conflicto, sino pareciera ser que el problemario estamos creándole un par de aristas más que tarde o temprano habrán de regresar.

Es cuanto, Magistrada Presidenta, Magistrado Silva.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Muchas gracias.

Magistrado Silva.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: Sí, efectivamente hay muchos asuntos donde se realizan votaciones, están los laborales que termina en la jurisdicción laboral para ver quién tiene la mayoría y detente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo y la dirigencia de cierto sindicato.

Recuerdo que en el Tribunal Superior Electoral de Bolivia tiene una competencia tan amplia que también revisa ese tipo de procesos electorales. Pero bueno, aquí es el sistema consultivo indígena y de los que nos ha tocado conocer y, bueno, era algo que ya se venía viendo desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, que eran los

procedimientos de consulta que se llevan a cabo, por ejemplo lo de Segundo Piso, lo de Tajín, lo del Cerro del Fortín, lo del Servicio de Transporte Público, el incremento del pago de derechos en el estado de Jalisco, en Nuevo León también hubo otras consultas en el municipio de Monterrey, y varios precedentes que se han presentado en las consultas.

Es cierto, ha habido algunos cambios, particularmente con la última integración de la Sala Superior, pero en cuanto a lo que tiene que ver con las consultas están los precedentes que si no establecidos en cuanto a las características que deben revestir las consultas.

Y entonces aquí son órganos de gobierno, de carácter político en los ayuntamientos, en esta comunidad indígena que es Santa María Sevina, y eso es lo que permite analizar lo relativo al conflicto que se viene planteando, porque en el fondo lo que está es que los procesos de consulta, a decir de la *litis* cómo está trabado son legítimos y regulares, y entonces en ese sentido de ahí deriva la autoridad, la representatividad de estos consejos. Y cuando se presenta una situación de incertidumbre a lo que se está haciendo en el proyecto entiendo es revestir de una serie de condiciones echando mano, efectivamente, tanto del Instituto Electoral de Michoacán, como del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, inclusive también se requiere el apoyo del gobierno del estado precisamente para la adecuada realización de estos procesos en condiciones de certeza.

Y me parece que en el fondo los tres planteamientos que tenemos aquí es que las cosas no están funcionando de manera regular en la comunidad y por eso está esa situación de incertidumbre, que ya sea a través de una sentencia, o bien, directamente ante el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, demandan un acompañamiento, porque lo que sí aparece es la total incapacidad de las autoridades o de quienes se ostentan como autoridades de estas comunidad de Santa María Sevina, para poder, precisamente, llevar a, primero hacer el proceso a través del cual son designados, que tengan todos estos elementos, que precisamente otorgue certidumbre.

Y no es que nosotros estemos traspolando o llevando una propuesta donde tiene o está dirigida a realizar una asimilación prohibida, forzosa, una integración forzosa, no; sino lo que se trata es de que exista el

acompañamiento institucional para que, efectivamente, tengan certeza en cuanto a la realización del procedimiento de consulta y, efectivamente, se pueda elegir al órgano de la propia comunidad que en su momento va a ser quien va a administrar los recursos, aplicarlos y rendir cuentas. Eso es lo que está en el fondo.

Y yo lo entiendo en las tres posiciones que se están señalando, es necesario que se dé una solución a una situación de indefinición, eso que ni qué, no se puede desconocer una situación irregular que permanece en la comunidad y que no les ha permitido a la propia comunidad resolver estas diferencias, ellos mismos, procesarlas y con la participación del mayor número de sujetos que, efectivamente, resulte representativa y que se le dé un espacio a todas las voces, tanto a las mayoritarias como a las disidentes o minoritarias, eso es un principio democrático; se trate de un sistema de partidos políticos, de candidaturas independientes o un sistema de elecciones bajo el sistema normativo indígena, en este caso aunque sea para la administración de los recursos se tiene que dar participación a las minorías.

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no tienen un carácter absoluto, como todos los derechos humanos, se encuentran limitados, y dentro de las limitaciones están las limitaciones que derivan del principio de que deben respetarse, valga la expresión, todos los principios que se establecen en la Constitución que resulten aplicables a las propias comunidades y este sería uno de esos principios que sería el de la representatividad, que se trate de procesos auténticos, que se respeten los derechos humanos y dentro de los derechos humanos está, precisamente, el derecho de darle voz, participación a todos los actores políticos, a todos los integrantes de la propia comunidad.

Es cierto que se tiene que tomar las decisiones, tiene que haber un procedimiento para resolver todas estas diferencias y adoptar una decisión, que es el principio mayoritario, pero inclusive dentro de este sistema para la toma de decisiones, esto no implica que se invisibilice a las minorías. Entonces, ese es también otro aspecto fundamental que se hace hincapié, se subraya en la propuesta, que es precisamente darle participación, voz, intervención, inclusive para la toma de decisiones, en cuanto a que se pueda interpretar que efectivamente es una determinación que se ha adoptado por la comunidad.

Entonces, en la medida en que no se encuentre solución, que no se puedan procesar los propios conflictos dentro de la comunidad, bueno y acudan a un órgano jurisdiccional, como es este caso, ya sea después, ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o previamente y después será que se tenga que dar una definición también, me parece que, quien no esté de acuerdo con la propuesta, en los términos, de cuál es la ruta que debe seguir.

Es decir, si los conflictos no se pueden resolver a través de estos procesos de conciliación y mediación que se reconocen en el artículo 17 y que me parece que pueden ser los más cercanos a una propia, a una comunidad, pues entonces será acudir a la jurisdicción del estado, porque lo está prohibido es precisamente la autotutela y la adopción de otras medidas que no crucen por un método pacífico de solución de las controversias.

Y entonces estamos hablando de un entorno que es un entorno, un contexto pues muy complejo, como lo destacaba la Magistrada Presidenta, complicado, que no solamente se limita a la cuestión relativa, a la entrega de recursos y quién es el que lo maneja, sino en el caso del municipio de Nahuatzen ha pasado por distintos procesos, todo lo que tiene que ver con definiciones de carácter político ha sido en materia de un procedimiento, está el proceso electoral local de 2018, que nos tocó a nosotros conocerlo.

Lo relativo a la elaboración de un estatuto y la renovación del consejo ciudadano indígena de otra comunidad, Desierto, la cabecera de Nahuatzen, la definición de si es un sistema de partido o un sistema normativo indígena el que se va a llevar a cabo para la elección de sus autoridades y lo, insisto, lo relativo a la entrega de recursos, pero esta entrega de recursos ha sido en las distintas comunidades, si no es que todas, la gran mayoría del municipio de Nahuatzen.

Entonces, esta complejidad que debemos de interpretarla como una riqueza del mosaico que se puede presentar en las comunidades, por donde no puede cursar es por una situación permanente de conflicto en donde, pues bueno, mientras vienen las definiciones, pues ahí van las cosas y me parece que los tres ya lo hemos destacado.

Bueno, en primer lugar, el Magistrado Avante, después usted Magistrada y ahora yo también lo subrayo, quien no puede quedar al margen de estas decisiones que se adoptan por las comunidades es la propia comunidad, es el elemento esencial y primordial, por la cual se constituyen los gobiernos indígenas por el sistema de partidos o candidaturas independientes, la comunidad. Y entonces no todo puede quedar en el limbo de un conflicto comunitario entre las autoridades en donde se están enfrascando en algunas diferencias y no logran avanzar y procesar sus conflictos en beneficio de la comunidad.

Y eso es lo que está quedando al margen y eso en la solución del Magistrado Avante o la que se está perfilando como mayoría eso es lo que nos interesa, la comunidad. Eso es algo que no se puede perder de vista, ni siquiera por el ayuntamiento municipal, porque la circunstancia de que sea la comunidad que diga: “Es que nosotros queremos manejar nuestro presupuesto y aplicarlo, esto no deja al margen al municipio, porque mientras las obligaciones que derivan del artículo 115 siguen”.

Y entonces entre que se resuelve el conflicto lo que no puede quedar es al margen nadie, y entonces como estamos aquí con diferencias vamos a seguirnos peleando o teniendo este diferendo, y ya que la comunidad a ver quién es el que le presta los servicios, porque finalmente la comunidad también tiene los elementos, el poder de decisión a través de qué, que ese es el aspecto que también advierto en las dos posiciones.

La Asamblea es el órgano máximo de la comunidad y finalmente la Asamblea tendrá ese poder para decir si, efectivamente, esas instancias comunitarias a las que se les ha confiado la administración de los recursos o la conducción de la vida política del municipio, puedan efectivamente realizar sus funciones de manera adecuada. Es un mandato que tiene un carácter temporal, que está sujeto a resultados, a un proceso de evaluación.

Yo todavía no entiendo que alguien le confíe alguien una responsabilidad y después se ponga una venda y diga: “Bueno, ya tienes un poder de manera atemporal, imprescriptible e irrevocable. Y entonces independientemente de lo que hagas, si eres eficiente o no para el cumplimiento de tu mandato yo ya no podré tener la capacidad de revisarte, pedirte que me rindas cuentas de qué es lo que has venido

haciendo y si efectivamente puedes hacer las cosas y el mandato que te estoy confiando”. Pues eso no puede ocurrir.

Yo lo entiendo en cualquier cosa simple y sencillamente cuando alguien en una cuestión tan elemental como es encargarle que vaya a pagar la luz o que vaya por el mandado o que revise alguna cuestión de labranza o la hortaliza o la cocina o lo que sea, después no le diga: “Oye, ¿qué pasó con lo que te encargué? ¿Qué fue lo que hiciste?” Bueno, es que mientras no nos poníamos de acuerdo alguien más y yo, pues entonces resulta que finalmente no hicimos lo que nos encargaste y no compramos los medicamentos o no atendimos lo que correspondía, no sé, a impermeabilizar el techo y entonces, en fin, y es el caso que estamos aquí con las goteras, y entonces qué pasó con los recursos, qué pasó con esta cuestión. Bueno, es que no nos podíamos de acuerdo, eso no puede pasar.

Y si finalmente esas personas, ese grupo de sujetos a los que se les ha encomendado algo no pueden cumplir con su función, no podemos estar todos los que habitamos en un mismo domicilio, en una misma cuadra, en una misma colonia sujetos a sus diferencias.

Habrá que tomar determinaciones, hasta que las cosas, efectivamente, se puedan llevar a cabo.

Es cuanto, Magistrada Presidenta y Magistrado.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Magistrado Avante.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Sí. Lo claramente complicado es sistemático que se provoca, porque claramente de la exposición yo advierto la necesidad de resolver este problema, pero estamos involucrando a una autoridad electoral con una autoridad indígena, los cuales tienen ámbitos de actuación diferentes.

La autoridad indígena es del Ejecutivo Federal, una autoridad administrativa y la autoridad electoral es una autoridad estatal de naturaleza electoral.

Las determinaciones del Instituto Electoral del Estado siguen una cadena impugnativa hacia el Tribunal del estado y eventualmente ante nosotros y la Sala Superior.

Las determinaciones de una autoridad administrativa federal seguirán la suerte de ir a quizá al juicio de nulidad o quizá ir directo al juicio de amparo, al recurso de revisión por el otro lado de la cadena impugnativa de la justicia federal.

Tarde o temprano vamos a estar en presencia de una determinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sea incompatible con el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y quiero ver qué vamos a hacer.

Eso es asistemático porque estamos diseñando un procedimiento en donde estamos involucrando autoridades de distintos ámbitos a que coadyuven en la organización de algo para lo cual existe un órgano expofeso, pero me parece ser que lo que debe delimitar la materia no es las fases o procedimientos que hay.

La elección de un Consejo, de un comisariado ejidal es materia agraria, porque está involucrado en un proceso agrario, porque involucra derechos agrarios, no electorales.

Ciertamente hay una elección ahí de por medio, pero es una cuestión eminentemente agraria, lo que define la materia son los derechos que están involucrados.

Aquí yo estoy convencido, y con esto termino, que esto es una cuestión de ejercicio del gobierno comunitario, es una cuestión de ejercicio del gobierno dentro de la comunidad, es materia estrictamente administrativa, no electoral.

Entonces, ese derecho que tiene la comunidad a autoadministrarse, ese derecho que tiene de que se hagan, de que prevalezcan sus determinaciones, es una cuestión materialmente administrativa, no electoral, y por eso involucrar a una autoridad electoral creo que tarde o temprano generará circunstancias asistemáticas.

Es todo, Magistrada Presidenta, Magistrado Silva.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Gracias, Magistrado.

Secretario General de Acuerdos, por favor, proceda a tomar la votación.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Como lo indica, Magistrada Presidenta.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: En contra del proyecto de cuenta.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrado Juan Carlos Silva Adaya.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: De acuerdo con la propuesta.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Es mi consulta.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Magistrado Avante.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Gracias, Presidenta.

En términos de lo expuesto por el reglamento interno de este órgano jurisdiccional se me permitirá un voto particular antes de la firma del asunto.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Por supuesto.

Secretario General de Acuerdos, por favor tome nota.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Tomo nota de la emisión del voto particular.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: En consecuencia, en el juicio ciudadano 145 y 158, ambos del año en curso, acumulados, se resuelve:

Primero.- Se decreta la acumulación de los juicios mencionados.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente ejecutoria al expediente del juicio acumulado.

Segundo.- Se revoca en lo que fue materia de controversia la sentencia dictada el 6 de septiembre del año en curso en el incidente innominado que se controvierte en el expediente STJDC-145/2019.

Tercero.- Se revoca en la materia de la impugnación el acuerdo de 9 de octubre del presente año, controvertido en el expediente ST-JDC-158 del 2019.

Cuarto.- Se dejan sin efectos las presuntas asambleas y/o reuniones llevadas a cabo por los grupos opositores en la comunidad indígena de Santa María Sevina Nahuatzen, Michoacán, los días 19 de julio, 30 de julio, 3 de agosto, 21 de septiembre, 28 de septiembre y 9 de octubre, todas del 2019.

Quinto.- Se ordena a la comunidad de Santa María Sevina Nahuatzen, Michoacán para que en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia, se lleve a cabo una asamblea general comunitaria incluyente de todos los miembros de la comunidad indígena, mediante convocatoria que debe ser ampliamente difundida con el propósito fundamental de que se procure la asistencia del mayor número posible de los habitantes de la comunidad, incluidos los grupos opositores o disidentes para que, en su caso, sean escuchados y se adopte la determinación que se considere

más benéfica para la colectividad, con la finalidad de que se determine lo conducente sobre la extinción o reconocimiento del consejo comunal y/o consejo comunal de administración o la autoridad u órgano que debe recibir y administrar los recursos que otorgue el ayuntamiento, así como para definir, en su caso, la integración, atribuciones y duración del órgano respectivo.

Del cumplimiento de lo anterior se deberá informar a la Sala Regional Toluca dentro del plazo de 24 horas siguientes a que ello ocurra.

Sexto.- Para la realización de la respectiva asamblea general comunitaria se vincula al Instituto Electoral de Michoacán, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al gobernador de esa entidad federativa para que coadyuven en el ámbito de sus atribuciones en términos de lo determinado en el considerando décimo quinto de esta ejecutoria.

Séptimo.- Hasta en tanto se determina la autoridad comunal que debe recibir y administrar los respectivos recursos, se vincula al ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán para que preste los servicios públicos conducentes a la comunidad indígena de Santa María Sevina.

Octavo.- Se amonesta y se impone una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización vigente en el ejercicio del 2019 al delegado o a quien legalmente los sustituya del Registro Agrario Nacional en Michoacán derivado del incumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados durante la sustanciación de juicio que se resuelve.

Noveno.- Se instruye al Secretario General de Acuerdos de esta autoridad jurisdiccional para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo determinado en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto de esta ejecutoria.

Décimo.- Se vincula al Tribunal Electoral del estado de Michoacán, a fin de que lleve a cabo los actos tendentes para la realización de la traducción a la lengua purépecha del resumen de este fallo y una vez hecho lo anterior, a su difusión a los integrantes de la comunidad de Santa María Sevina Nahuatzen, Michoacán.

Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Alfonso Jiménez, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Silva Adaya.

Secretario de Estudio y Cuenta Alfonso Jiménez: Con su autorización, Magistrada Presidenta, señores Magistrados.

Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 144 de este año, promovido por Ana María Maldonado Prado, Salvador Juárez Capis, Jaqueline Montiel Avilés, Efraín Villagómez Talavera, José Prado Rodríguez, Juan Antonio Torres Torres, Gloria Herrera Ruan, Roberto Arriola Jiménez, Sandra Patricia Irepa Ruan, María América Huerta Espino, Sergio Ramírez Huerta y Efraín Avilés Rodríguez, en su carácter de integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, quienes se auto-adscriben como indígenas, purépechas, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán el pasado 5 de septiembre del presente año en el juicio referido, por medio del cual declaró parcialmente fundado el incidente de incumplimiento de sentencia.

En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los motivos y agravios planteados por la parte actora, porque la sentencia impugnada se encuentra, como se sostiene en el proyecto, debidamente fundada y motivada.

En la propuesta se establece que resulta errónea la afirmación de los actores en el sentido de que el Tribunal Electoral del estado de Michoacán, desconoció los usos y costumbres de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán, porque contrariamente a ello reconoció que la Asamblea General de la Comunidad es la facultada para determinar de manera libre y autónoma a los órganos que la representan, es decir, la Asamblea General Comunitaria en la que se encuentra representada la comunidad indígena en su carácter de autoridad suprema de la comunidad, es la que decide qué órganos la representan.

En el proyecto de la cuenta se establece que si bien los actores plantean en su demanda que ellos son la representación indígena de Nahuatzen

y en ellos descansa la facultad de convocar a las asambleas en la comunidad indígena, dicha afirmación no tiene sustento normativo alguno.

La determinación sobre la existencia o la desaparición de los órganos internos de las comunidades indígenas recae única y exclusivamente en la comunidad representada a través de su Asamblea General Comunitaria.

Asimismo, se sostiene que el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen no puede estar por encima de las determinaciones de la propia Asamblea, tal y como lo pretenden los actores en el presente juicio.

Efectivamente, el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen se encontraba constreñido actuar de conformidad con el mandato que le fue concedido en una asamblea celebrada el 7 de septiembre de 2015 y en ese sentido crear los estatutos y normas internas de dicho consejo que permitieran desarrollar la vida democrática de la comunidad, sin que le hubiere dado cumplimiento a dicho mandato.

Para ello se sostiene en el proyecto que los hoy actores contaban con atribuciones para convocar a la Asamblea General, puesto que dicha facultad resultaba legítima en tanto su ejercicio contribuya al bienestar comunal y, sobre todo, a la concreción de los mandatos expresamente dados por la Asamblea General Comunitaria.

De ahí que cuando dicha atribución de convocarse deje de ejercer de manera negligente e incluso dolosa, pierda su legitimidad y utilidad, siendo válido que la propia Asamblea General constituya un nuevo órgano representativo que cumpla con lo que lo primero dejó de hacer.

De ahí que se proponga declarar infundados los agravios formulados por la actora y en ese sentido, confirmar la sentencia impugnada.

Doy cuenta ahora con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número 156 de este año, promovido por Marco Antonio Hernández Equihua, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 4 de octubre del

2019 en el expediente del juicio ciudadano local 52 del presente año, en la que se confirmó la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en la que se ordenó la designación provisional de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Municipal del PRI en Morelia, Michoacán.

En la propuesta se consideran infundados los agravios formulados por el acto, entre otras razones porque el Tribunal responsable atendió y analizó los agravios que fueron expuestos por el hoy actor, no obstante haber incurrido en una falta formal consistente en invocar las normas estatutarias aplicables al procedimiento de sustitución provisional de los titulares de la dirigencia municipal del PRI en Morelia.

Por lo que, contrariamente a lo afirmado por el actor, la designación provisional de los titulares de la dirigencia municipal sí se encuentra regulado en las normas estatutarias vigentes del citado partido político.

En ese sentido, la propuesta concluye que no se actualiza ninguna vulneración al derecho de la militancia de participar en los procesos de renovación de los órganos político municipales del partido en el que se encuentran afiliados, debido a que la designación de los citados titulares es provisional y una vez que se encuentre debidamente integrado al Comité Municipal se dará curso a los procedimientos de renovación del Consejo Político y del propio Comité Municipal del PRI en Morelia.

Es por ello que se propone a este Pleno confirmar la sentencia impugnada, con base en las razones y fundamentos legales que se invocan en la consulta.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, señores Magistrados.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Muchas gracias, Secretario.

Magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de la cuenta.

Magistrado Avante, por favor.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Gracias, Presidenta. Únicamente para señalar que de no existir inconveniente, intervendría en el juicio ciudadano 144, y anticipo mi conformidad con el juicio ciudadano 156.

Si no hubiera un tema, me referiría al 144. En el caso concreto se da un escenario similar al del 145 en este caso, pero en este se advierte la problemática de que pareciera ser que desde que se planteó la temática al Tribunal Electoral del Estado no era su competencia haberse pronunciado en la forma en la que lo hizo y menos aún perseguir el cumplimiento de un juicio diverso en un juicio nuevo o más bien dicho de una determinación de la Asamblea Comunitaria en un juicio nuevo, vinculando a otra autoridad comunitaria.

Me explico. Aquí quienes comparecen son los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, y solicitan, entre otros aspectos, me parece ser del todo relevante señalar que ellos piden que se reconozca al Consejo como el órgano legítimo de gobierno de la comunidad que se declare que la Comisión de Diálogo y Participación carece de personería jurídica y legitimación para actuar a nombre de la comunidad, se ordene la entrega inmediata del recurso financiero a la comunidad, se desvincule del cuidado de la comunidad a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y, en su lugar, se vincule a la Guardia Nacional, se declare como única autoridad legitimada para convocar a la asamblea general comunitaria del citado consejo y que se declare la inconstitucionalidad de la resolución impugnada.

Esto es, en este caso me parece ser todavía más claro que estamos en presencia de un tema de gobierno comunal; o sea es una pretensión de naturaleza estrictamente administrativa.

Ahora, la problemática deriva que hay un juicio previo del Tribunal electoral del estado en donde la determinación que se adoptó en ese juicio no fue materia de impugnación, pero aquí lo que pasó es que en Nahuatzen cabecera se planteó la necesidad de renovar al consejo comunal y se pidió la ayuda del Instituto Electoral del estado y el Instituto Electoral del estado, me parece ser que acertadamente les contestó y les dijo: a ver, esto ya no es materia electoral. Esto es algo que tienen que procesar conforme a sus usos y costumbres y a su normativo de la comunidad.

Y esto fue impugnado ante el Tribunal del estado y el Tribunal del estado dice: ciertamente el Instituto actuó bien. Entonces, consejo comunal debe ser renovado, en fin, etcétera, pero en ese momento, en esa sentencia del juicio ciudadano el 15, me parece ser, el Tribunal dice: pero, yo advierto que hay una determinación del juicio ciudadano 35 de 2017, que vinculaba que se aprobaran los documentos de esta comunidad, que no se ha cumplido.

Entonces, como tú no has cumplido, consejo, voy a tomar a este comité de diálogo, comisión de diálogo y gestión para efecto de que ellos lleven a cabo este procedimiento y convoquen.

Creo que ahí, en la sentencia impugnada se mezclaron de manera incorrecta temáticas que no tenían, que venían de juicios diversos y de manera innecesaria, además, porque la comisión de diálogo y gestión me parece ser que fue una autoridad que estaba diseñada para la aprobación para el mecanismo para renovar al consejo comunal, pero no para llevar a cabo esta determinación de aprobar los documentos que se habían exigido en el juicio local 35 de 2017.

Pero, en esencia subsiste el mismo problema, es un conflicto de gobierno comunal, de autoridades intracomunitarias, porque este comité de diálogo pretende que se renueve al consejo ciudadana y el consejo ciudadano pretende que se desconozca al comité de diálogo y otra vez estamos en presencia de un conflicto entre autoridades de la comunidad.

Luego entonces, operaría la misma razón y para efecto de no volver a argumentar exactamente en los mismos términos, creo que una vez más estamos en presencia de un tema de incompetencia, tanto del Tribunal local como nuestra, porque no es materia electoral lo que está aquí en riesgo, no es ningún tema de materia electoral lo que está involucrado, sino incluso esto se torna todavía más manifiesto cuando se señala que se pretende que se desvincule del cuidado de la comunidad a la Secretaría de la Seguridad Pública del estado y que se vincule a la Guardia Nacional; esto es, se están pretendiendo o buscando otros aspectos distintos a los cuales exceden, creo yo, en muchísimo a la materia electoral.

Entonces, una vez más yo consideraría que este supuesto también tendría que haber sido materia de conocimiento por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en acompañamiento con la comunidad de Nahuatzen Cabecera y llegar a un mecanismo de solución a partir del cual se dé cumplimiento a lo ya ordenado por los diferentes, incluso el propio Tribunal en las diversas sentencias, pero ciertamente creo que no nos corresponde a nosotros analizar o ponderar si la Asamblea estuvo bien o mal hecha o si es adecuado o no el procedimiento, porque esto creo que eventualmente ya no incide en forma alguna en la materia electoral.

Por ello es que respecto de este juicio ciudadano 144 votaré en contra de la propuesta.

Es cuanto, Magistrada Presidenta, Magistrado Silva.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Magistrado Silva, por favor.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: Gracias, Magistrada, Magistrado Avante, con su venia.

En relación con este expediente que es el ST-JDC-144/2019, algo que se viene manifestando y por eso se preparó esta presentación, es lo relativo al contexto.

Como pueden ustedes advertir, si nos regresamos a la lámina inicial, hay cinco aspectos fundamentales. El primero corresponde al proceso electoral local del 2018, una segunda vía de impugnación, que es la elaboración del estatuto y la renovación del Consejo Ciudadano Indígena; la otra, la determinación del sistema que se va a llevar a cabo para elegir a las autoridades, bien sea el Sistema de Partidos Políticos o el Sistema Normativo Interno, es decir, indígena, y lo final es la entrega de recursos.

La primera parte que queremos abordar corresponde a unos aspectos importantes que tienen que ver precisamente con lo que corresponde al listado y padrón electoral que este primer círculo que si lo analizamos nos revela que estamos hablando en octubre de 2019 de un listado nominal de 19 mil 881 ciudadanos, un padrón electoral de 20 mil 155.

Si regresamos y avanzamos al segundo que corresponde a resultados electorales vemos qué es lo que se ha presentado.

En el 2014 y 2015, lo señalamos, se advierte quién ganó la elección, el Partido Acción Nacional, PRD, PT, Nueva Alianza y el Partido Humanista, con un listado nominal similar al que ya había destacado, una votación total de 13 mil 526 personas y de los cuales votos para el ganador fueron 1 mil 979.

Si avanzamos al siguiente proceso, que es el de 2017 y 2018 gana la coalición PAN-PRD, con un listado nominal de 19 mil 850 personas, de las cuales votaron 5 mil 170, votos para el ganador fueron mil 927.

Regresamos, por favor, al inicio, más atrás. Y ya podemos ver la primera parte que corresponde al proceso electoral local del 2018.

Regresamos más, por favor; eso es. Ahora, a la primera de las circunferencias que es, efectivamente, es esa; aquí vienen los hechos del 2018 y 2019.

Esto lo estamos repasando por lo siguiente: Están mencionando, están todas las partes que se debe tener como referente el contexto y, efectivamente, cuando uno revisa el contexto puede explicar por qué finalmente aparece una presidenta municipal sustituta y corresponde, precisamente, a esta cuestión: El 1º de julio se realiza la jornada electoral, ya lo habíamos anticipado quién ganó, viene después una resolución del Tribunal local, se confirma la declaración de validez de la elección, el 24 de agosto viene una resolución de la Sala Toluca donde declara la nulidad de la elección.

Y se declara la nulidad de la elección, porque como se recordará, no se instalaron casillas en ciertas comunidades y esto nosotros habíamos comprendido fue una decisión mayoritaria que no abonaba en el cuanto al principio de certeza.

Es decir, una elección donde no participan todos los que deben intervenir, así sea que se habían instalado unas casillas a las afueras de las comunidades, pero no dentro de la comunidad, en los domicilios donde se había autorizado por las autoridades correspondientes,

entonces se llegó a la conclusión de que no se cumplían los aspectos de carácter cualitativo y cuantitativo para la realización de un proceso.

Efectivamente, esta sentencia después fue revocada por la Sala Superior en el REC-1061 del 2018, porque concluyó que tenían que actualizarse todos los aspectos y que no se había tenido en perspectiva que había sido a través de una determinación de la propia autoridad administrativa electoral que no se habían instalado las casillas como correspondía, y entonces esto permitía preservar el resultado.

Finalmente, bueno, evidentemente esto se trata de una verdad jurídica incontrovertible, la determinación que se adoptó en una sentencia de la Sala Superior, por precisamente estar dentro de su competencia, pero finalmente que dada la circunstancia, un hecho irrefutable de que no se habían instalado las casillas como correspondía, independientemente de que esto no hubiere sido determinante.

Entonces, esto fue un ingrediente que pervivió durante toda la circunstancia y así nosotros podíamos agregar a esta cuestión de que el 1º de septiembre se lleva a cabo la toma de protesta del presidente municipal y el 23 de abril del 2019 ocurre el homicidio del presidente municipal que dio lugar, precisamente, al nombramiento de una presidenta municipal sustituta, que es quien ha estado encabezando el municipio y que tiene una participación relevante en todo el contexto del conflicto que se viene presentando en el municipio de Nahuatzen y fundamentalmente en la comunidad de Nahuatzen, que es la cabecera del municipio.

Luego, si nos regresamos y vamos a la tercera de las circunferencias, efectivamente esta, podemos ver otra secuela procesal que se ha presentado; de julio a noviembre, el consejo ciudadano indígena solicitó a diversas autoridades la realización de una consulta para cambiar su régimen al sistema normativo indígena.

Entonces, esta cuestión, en el 2018 se vienen adoptando una serie de determinaciones, que tienen que ver fundamentalmente con esto.

El 21 de noviembre, el Instituto Electoral de Michoacán ordena dar trámite a la consulta. El 29 de noviembre del 2017 se presenta una

controversia constitucional y da lugar a la suspensión por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, el 22 de marzo de 2018, se sobresean en dicha controversia constitucional, que es la 307 del 2017 por falta de competencia, pero mientras ya se habían paralizado este procedimiento, que era precisamente para determinar el sistema que se iba a implantar si era por el sistema de partidos o el sistema normativo indígena.

Vienen las determinaciones, también son objeto de medios de impugnación, viene una primera decisión de la Sala Regional Toluca en el sentido de que no había tiempo para llevar a cabo la consulta. Esta determinación fue revocada por la Sala Superior y dijo: hágase la consulta y finalmente se presenta un resultado, el 28 de agosto de 2018 en el que, de un total de votos, que fue dos mil 511 optan por el sistema de partidos dos mil 279 personas, solamente seis dicen que tendrían que ser un sistema normativo indígena con 226 abstenciones.

Se declara la validez de la consulta por el Instituto Electoral de Michoacán el 31 de agosto del 2018.

Y luego, si vamos a la última efectivamente circunferencia que atañe a lo siguiente: la entrega de recursos.

Sobre esto ya ha habido definiciones, primero: el consejo ciudadano indígena, que debo aclarar que es un consejo ciudadano que se estableció el 7 de septiembre de 2015 con ciertos mandatos. Uno de esto mandatos era la aprobación de la normativa para dar precisamente certidumbre.

Debemos recordar que los sistemas normativos indígenas son regularmente de una tradición oral, no se encuentran codificados, pero dada la problemática que ya se estaba presentando, proceso electoral, sistema normativo indígena para efectos de la elección de autoridades o entrega de recursos, entonces, una determinación que se adoptó.

Viene en abril y julio, el consejo ciudadano indígena solicita la entrega de sus recursos económicos.

Después esto es impugnado ante el Tribunal Local, el Tribunal ordena al Instituto la celebración de una consulta, el Instituto ordena dar trámite a la consulta y esta consulta, como aquella que se había presentado para la definición del sistema normativo, recordemos que fueron suspendidas por efecto de la controversia constitucional. Entonces, esto fue paralizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente después de que se sobreseyó.

Los ciudadanos en Nahuatzen presentan un incidente de falta de personería en un juicio ciudadano ante el tribunal local y este es resuelto como infundado.

El 24 de mayo de 2018 se acuerda la entrega de recursos y quien iba a manejar estos recursos, administrarlos en el Consejo Ciudadano Indígena, según una determinación del 24 de mayo, a través de una consulta del 2018.

El 12 de junio el ayuntamiento también de esta misma anualidad, autoriza la entrega de los recursos, se reciben aproximadamente 15 millones de pesos por el Consejo Ciudadano Indígena; y el 1º de octubre del 2018, el Tribunal local tiene por cumplida la sentencia.

Después, también hacia finales del 2018, concretamente el 11 de noviembre, se crea la Comisión de Diálogo con la participación de 354 personas.

El 22 de noviembre, a ver si seguimos avanzando, se determina lo relativo a las reglas para celebración de las Asambleas Generales a través de una sentencia de esta Sala Regional, que es la de 714 del 2018.

En febrero y marzo del 2019, el ayuntamiento determina suspender la entrega de recursos por falta de rendición de cuentas; el 9 de abril ante la falta de pago o entrega de estos recursos, el Consejo Ciudadano Indígena presenta un incidente de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Electoral Local. El tribunal lo reencausa y lo conoce como el JDC-21 del 2019.

Los ciudadanos de Nahuatzen presentaron un incidente de falta de personería en contra de los actores del juicio ciudadano 21, el Tribunal

del estado dice que se debe entregar el recurso aun cuando no, bueno, en fin, ahí hace otra serie de consideraciones, y resuelve lo relativo al incidente que sí tienen personería los actores.

Los ciudadanos de Nahuatzen impugnan la resolución incidental el 21 de junio y esta Sala confirma la personería de los actores en el juicio local.

Y entonces ya si nos regresamos otra vez y vamos a la segunda de las circunferencias de mi lado izquierdo, ahora sí viene la *litis* que nos ocupa, pero mientras tenemos toda esta situación periférica que viene articulando el contexto, la existencia de una autoridad que llegó después de un proceso en donde había problemas con la instalación de casillas, la muerte del Presidente Municipal y el nombramiento de una presidenta municipal sustituta.

En donde las casillas que se debían instalar eran 37, no se instalaron 12 y esto implicaría que dejaron de votar aproximadamente 7 mil 574 ciudadanos, entonces podríamos decir, dicho de manera muy fría, que se trataba de un ayuntamiento municipal que iba respaldado por un número cierto de ciudadanos que potencialmente habían participado, dadas las circunstancias de que no habían instalado casillas.

Entonces, viene la parte relativa a la elaboración del estatuto y renovación del Consejo Ciudadano Indígena. El 5 de diciembre la Comisión de Diálogo, recordemos que esta Comisión de Diálogo viene funcionando desde el 11 de noviembre de 2018, y se instala precisamente por una situación conflictiva donde se habían presentado consultas si era el sistema normativo indígena o de partidos políticos, qué ocurría con lo relativo a la entrega del recurso, si estos recursos se ejercían adecuadamente o no.

Un ambiente derivado del proceso en donde diversas casas de campaña habían recibido afectaciones, donde existía la toma del palacio municipal, donde las autoridades municipales están despachando en otro lugar que no corresponde a la sede del ayuntamiento municipal, sino más bien el DIF. Y bueno, otros aspectos más que se vienen destacando.

Entonces, el 5 de diciembre la Comisión de Diálogo solicita al Instituto Electoral lo relativo a la aprobación del estatuto y la renovación del Consejo Ciudadano Indígena.

El Instituto Electoral niega la petición, con base en la autodeterminación del Consejo Ciudadano Indígena el 13 de diciembre. El 16 de diciembre se intenta llevar a cabo una Asamblea, que tiene un desenlace por hechos violentos. Esto fue en el 2018.

El 18 de enero la Comisión de Diálogo solicita al Instituto Electoral de Michoacán la realización de la Asamblea para crear el estatuto y la renovación del Consejo Ciudadano Indígena; vuelve a negar el Instituto Electoral de Michoacán la petición.

El 17 de febrero se celebra una Asamblea General que autoriza a la Comisión de Diálogo y al Instituto Electoral de Michoacán para crear el estatuto y la renovación del Consejo Ciudadano Indígena a través de una asamblea.

El 15 de marzo el Instituto no concede la petición y reencauza al Consejo Ciudadano Indígena la solicitud de renovación del órgano.

Entonces, se va viendo cómo uno de las instancias que estaba finalmente involucrado en cuanto al convocar a la Asamblea y la aprobación del estatuto, es donde está regresando recurrente el asunto, es decir, mientras que se advertía que una salida natural era, precisamente, el Instituto Electoral de Michoacán para coadyuvar a la realización de ese proceso, regresaba precisamente a un órgano que no, por decir lo menos, en su justa dimensión, que no estaba actuando eficazmente para el avance de los trabajos que databan desde el 2015, la aprobación del estatuto.

Y entonces, viene lo relativo a otro tipo de determinación, la comisión de diálogo impugna el acuerdo, porque considera que no se debió reencauzar la petición al consejo ciudadano indígena.

Entonces, esa era la lógica con la que se estaba promoviendo por la comisión de diálogo.

Regresa el asunto a un órgano que no puede avanzar en cuanto a algo que puede ayudar a destrabar el conflicto.

El Tribunal Electoral, a través del juicio ciudadano 15 del 2019 no le concede la razón a la comisión del diálogo, sin embargo, advierte el conflicto social y ordena al consejo ciudadano indígena que emitiera el estatuto en 20 días.

La comisión de diálogo presenta un incidente de aclaración de sentencia, el 5 de julio el Tribunal resolvió que no era de aclararse la sentencia.

El 5 de agosto el consejo ciudadano indígena solicita al Tribunal electoral una prórroga para dar cumplimiento a lo ordenado en el juicio ciudadano. No se concede la prórroga y se da vista a la comisión de diálogo. El Tribunal, el 13 de agosto abre un incidente de incumplimiento de sentencia del juicio ciudadano 15 y finalmente llegamos a lo que sería nuestro acto impugnado, que es del 5 de septiembre donde el Tribunal Electoral resuelve tener por incumplida la sentencia del juicio ciudadano 15 y ordena a la comisión de diálogo llevar a cabo la asamblea.

Es decir, vemos cómo el Tribunal Electoral, a base de comprobar una ineficacia va desplazando el polo de actuación, del consejo ciudadano indígena a la comisión de diálogo precisamente para que finalmente se llevara a cabo una asamblea comunitaria, como órgano máximo y no es que la comisión de diálogo determinara un contenido o el Tribunal un contenido de un ordenamiento que iba precisamente a identificar las reglas de la propia comunidad para efectos de la conducción de sus órganos representativos, en este caso el consejo ciudadano indígena y cómo se iba a manejar lo relativo a la administración del presupuesto.

El 10 de septiembre, el consejo ciudadano indígena presenta nuestro juicio, que es, sosteniendo que es quien tiene la representación de la comunidad, cuando esta cuestión ya había sido resuelta desde el 27 de junio y hasta el 10 de septiembre es que determina impugnar.

Mientras que tenemos un cumplimiento de una sentencia, donde se había dicho: tenías que convocar una asamblea y tenía que aprobarse el estatuto.

Entonces, más bien se estaba regresando una situación que ya estaba resuelta y respecto de la cual no se había inconformado la comisión, el consejo ciudadano indígena.

El 22 de septiembre la asamblea general desconoce al consejo ciudadano indígena y crea el estatuto.

El 26 de septiembre el Tribunal Electoral tiene por cumplida la sentencia del juicio ciudadano 15 del 2019 y la asamblea general elige al nuevo consejo ciudadano indígena.

Entonces, respecto a los agravios que se están haciendo valer, en cuanto a la suspensión, la suspensión ya no tenía que ver sobre algún aspecto, que estuviera relacionado con la identidad del órgano que iba a manejar esta situación conflictiva y que iba precisamente a transitar para una solución, que era la aprobación de los estatutos y eventualmente algún otro tipo de determinación.

Y entonces, ¿qué es lo que queda claro y lo que se trata de dilucidar en el proyecto? Y estoy convencido que se hace de una manera clara, sí es cierto, son muchos datos los que se están presentando y los que tienen que irse colocando en su justa medida.

Entonces, tenemos un escenario de un ayuntamiento municipal donde existe coincidencia en varios aspectos, inclusive con los planteamientos que se vienen haciendo por los actores, precisamente por el ayuntamiento municipal. Pero voy por orden.

Entonces, tenemos por una parte un Consejo Ciudadano Indígena que fue instalado, fue creado, fue integrado desde el 2015, con 12 personas que lo componían; vienen los actores que son integrantes de este Consejo Ciudadano Indígena junto con otros sujetos, con otras personas y dicen: "Bueno, de este Consejo Ciudadano Indígena, tres se encuentran en prisión y otros dos más no habitan o no residen en la propia comunidad, de tal manera que tenemos esta problemática".

Y coincide junto con el ayuntamiento municipal al destacar, bueno, no se vienen prestando regularmente los servicios, es más, no hay servicios. ¿Y por qué? Las justificaciones son variadas, porque no

tenemos los recursos, en otros casos porque tenemos este problema, por una parte una autoridad que determina que se entreguen los recursos y tenemos el problema de que no hay certeza en cuanto al manejo de los recursos.

Vamos a decir un Consejo Ciudadano Indígena con una representatividad disminuida en estas circunstancias; luego también que existe como resultado de esta situación conflictiva se acordó que nadie iba a ocupar las instalaciones del Palacio Municipal.

Y entonces por eso unos se están despachando en la sede del DIF y falta ver las fotografías y los videos que las propias partes aportan donde efectivamente se pueda advertir que no tienen la misma infraestructura, que no es el mismo edificio con las instalaciones suficientes sobradas para prestar los servicios.

Y entonces una decisión, vamos a decir, que se adopta en la cabecera municipal respecto de la cual no hay todavía certidumbre, pero sí en cuanto a que forma parte de un acuerdo, tiene un efecto en todas y cada una de las comunidades que forman parte del municipio; es decir, es una instalación para el municipio, no de la comunidad. Eso es claro.

Finalmente, lo que llevo a advertir también, tomando también en consideración el caso de la composición de las autoridades del ayuntamiento municipal, una presidenta municipal sustituta, normada, que no es objeto de la *litis* su proceso de designación, sino más bien lo refiero nada más como un hecho.

Lo ordinario es que esté un ayuntamiento con el presidente municipal que fue electo, que fallezca en un hecho de violencia, y entonces esto forma parte de todo el contexto, y lo que tenemos, entonces, y esta es una cuestión preocupante, dos instancias, la Comisión de Diálogo y el Consejo Ciudadano Indígena que encuentran cada uno en unos extremos, como se dice en términos de la terminología del conflicto, enfrentados, polarizados, y donde se advierte que no hay una capacidad o una gestión exitosa que les permita resolver estas diferencias y trabajar en beneficio de la comunidad.

Y vienen los actores, hacen afirmaciones inclusive, se transcriben en el proyecto, como del ayuntamiento municipal diciendo: “No hay servicios públicos municipales”.

Y, entonces, una cuestión que estaba, que ya estaba resuelta en cuanto a quién es claramente, como se va a optar para ejercer el gobierno, que es un gobierno de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes, pero con la variante de que los recursos son administrados por la comunidad, resulta que no hay recursos porque no se manejan y no se resuelven estas diferencias, y los acuerdos van sobre decisiones que tiene que soportar la comunidad.

Y, entonces, algo que debe de quedar muy claro en estos casos, dicen: Cuando un árbitro, cuando un juez no puede resolver un conflicto, un juez constitucional, un juez, en fin, con distintas facultades, cuál es el mejor árbitro, la comunidad, la Asamblea Comunitaria.

Y, entonces, esa es otra de las tesis que se sostiene el proyecto, que hay precedentes, muchísimos de la Sala Superior en cuanto al carácter de las asambleas comunitarias, es el órgano máximo de la comunidad.

Ningún órgano, inclusive los que son generados, creados por las asambleas comunitarias, tiene un carácter preponderante sobre la comunidad. No tienen un poder irrevocable, un mandato irrevocable imprescriptible, atemporal, eterno, no.

Inclusive la integración de las propias comunidades, de los propios órganos representativos pueden ser modificados.

El órgano representativo, el mandato, sus características también pueden ser modificadas.

Mientras que exista, efectivamente, como ya se ha aprobado en su precedente, Magistrada, que está inspirado en otros precedentes de la Sala Superior y de esta misma Sala Regional, hay condiciones para la realización de las asambleas, que deben dar certidumbre.

Y, entonces, lo que no puede ocurrir, me parece que esa es una conclusión que se puede desprender en este asunto, es una situación de incertidumbre, donde pareciera entonces que existe el interés de

prolongar esa indefinición, esa incertidumbre para no dar definiciones y que efectivamente, la comunidad resuelva los problemas. Es una resolución que se demanda. ¿Por qué? Porque no hay soluciones.

Y para esto ¿qué se requiere? Yo entendería, afortunadamente hay una cuestión que prevalece todavía, que se llama institucionalidad y que significa echar mano de estos instrumentos que se establecen en la Constitución y en las leyes generales de la República para resolver los problemas.

Y es esa precisamente la misión constitucional de los Tribunales, resolver problemáticas actuales, efectivamente, siempre y cuando sean competentes y ese es uno de los primeros aspectos que se despeja en el proyecto, la competencia.

La competencia es: se está impugnando una determinación, de un Tribunal Electoral local, que queda inserto dentro de nuestra circunscripción y que tiene que ver con autoridades que son electas en procedimientos consultivos y sus mandatos.

Ese es el quid del asunto, el aspecto a dilucidar, si efectivamente esa sentencia interlocutoria, que ya estaba pronunciándose sobre estos aspectos que se habían dejado atrás, es regular o no y la solución que se da es precisamente advirtiendo cuál es el contexto que se está enfrentando y la necesidad de atender urgentemente, dar una solución en beneficio de la propia comunidad.

Es decir, ningún órgano representativo, ninguno puede estar por el interés superior de la comunidad y ese es el predicamento fundamental, porque resolver es que existe un representatividad de un órgano que está integrado efectivamente por ciudadanas y ciudadanos de la propia comunidad, que igual podían participar en las distintas asambleas que se han llevado a cabo y a las que se les ha convocado, para precisamente deducir su posición y alegar lo que atendiera al interés de un órgano representativo en beneficio de la comunidad, pues efectivamente, pues si tenían ese mecanismo, pues habrá que echar mano y ganar el debate precisamente en las asambleas.

Y no es, me parece, la función de los Tribunales el estar legitimando instancias que ya pareciera que están desautorizadas por la propia comunidad. Ese es otro aspecto fundamental.

El carácter primordial de la asamblea y la limitación, las restricciones, de los mandatos de los órganos representativo y la posibilidad que tiene la asamblea de modificarlos.

Ese es el tema que se está presentando.

Y, finalmente, el eje vertebrador del proyecto es: el interés superior de la comunidad.

Es cuanto, Magistradas Presidenta y Magistrado Avante.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Secretario General de Acuerdos, por favor proceda a tomar la votación.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Como lo instruye, Presidenta.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Votaré en contra del proyecto del juicio ciudadano 144, por las razones que he expuesto; y a favor del juicio ciudadano 156, y dado el sentido del juicio anterior resuelto anticiparía la formulación de un voto particular de una vez solicitaría que se incluyera antes de la firma.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Tomo nota.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: Con los proyectos de la cuenta.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Con ambos proyectos.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta, le informo que le proyecto del juicio ciudadano 144 ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del Magistrado Alejandro David Avante Juárez, quien anuncia la emisión de un voto particular.

Por cuanto hace al JDC-156, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Gracias.

En consecuencia, en el juicio ciudadano 144 del año en curso, se resuelve:

Primero.- Se confirma la sentencia interlocutoria impugnada.

Segundo.- Se vincula al Tribunal Electoral del estado de Michoacán, a fin de que realice la traducción a la lengua purépecha del resumen de este fallo.

Y una vez hecho lo anterior, se lleven a cabo los actos tendientes a su difusión a los integrantes de las comunidades indígenas de Nahuatzen, Michoacán, en términos de lo resuelto en el considerando décimo primero del presente fallo.

Tercero.- Se vincula al ayuntamiento municipal de Nahuatzen, Michoacán, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto Electoral del estado de Michoacán, para que de inmediato actúen de conformidad con lo ordenado en la parte final del considerando décimo primero de esta sentencia.

En el juicio ciudadano 156 del año en curso, se resuelve:

Único.- Se confirma la sentencia impugnada con base en las razones y el fundamento legal invocados en la presente sentencia.

Secretario General de Acuerdos, por favor dé cuenta con el proyecto en el que se propone la improcedencia del medio de impugnación respectivo.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Doy cuenta con el juicio electoral 17 del año en curso, promovido por la presidenta municipal sustituta en funciones del ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, en contra del acuerdo de 9 de octubre del año en curso emitido por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, en el juicio ciudadano local 187 de 2018.

En el proyecto se razona medularmente que en el asunto que se resuelve se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación de la parte actora para controvertir la sentencia impugnada, ya que acorde al sistema de medios de impugnación no se prevé supuesto que faculte a las autoridades estatales o municipales para acudir al Tribunal Electoral cuando han formado parte de una relación jurídico procesal como sujeto pasivo.

Además tampoco se está en los supuestos de excepción a que se aluden en el proyecto de resolución sometido a consideración de este pleno; por tanto, se considera que lo procedente es desechar de plano la demanda.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, señores Magistrados.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Gracias, Secretario General de Acuerdos.

Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta.

Magistrado Avante, tiene el uso de la voz.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: Gracias, Presidenta, y ya este es el tercero con esta jurisprudencia, ¿verdad?

Votaré en contra de esta propuesta por las razones señaladas en el caso del 158, es el mismo acto reclamado, es el acuerdo de la

Magistrada instructora, creo que estaríamos en los mismos supuestos del juicio ciudadano 185.

Aquí con la salvedad, incluso, que me parece ser que ciertamente la comparecencia de la presidenta municipal sustituta es precisamente sí en su calidad de parte allá, porque precisamente estima que hay algún tema de afectación y eventualmente yo ponderaría que esto tendría que haber sido del conocimiento, primero del pleno del Tribunal Electoral del Estado, antes de acudir a la instancia de la Sala Regional, porque eventualmente el pleno del Tribunal podría dejar sin efectos la actuación de la Magistrada instructora.

Es cuanto, Magistrada Presidenta, Magistrado Silva.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Gracias.

Secretario General de Acuerdos, por favor, proceda a tomar la votación.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: En contra del proyecto.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrado Juan Carlos Silva Adaya.

Magistrado Juan Carlos Silva Adaya: De acuerdo con el proyecto.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: Con el proyecto de cuenta.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Magistrado Avante.

Magistrado Alejandro David Avante Juárez: De igual forma, Magistrada, de acuerdo al artículo 48 solicitaría se me autorizada la emisión de un voto particular.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez:
Secretario General, por favor, tome nota.

Secretario General de Acuerdos Antonio Rico Ibarra: Tomo nota, Presidenta.

Magistrada Presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez: En consecuencia, en el juicio electoral 17 del año en curso se resuelve:

Único.- Se desecha de plano la demanda del juicio electoral.

Señores Magistrados, al no haber más asuntos que tratar, siendo las 19 horas con 40 minutos del 19 de noviembre del presente año, se levanta la sesión.

Gracias.

----- oo0oo -----